



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

PROCESO: DILIG. PENSION MAGIST. NACIONAL.

ACTORA: xxxxxxxx.

Voto N°0947-2013

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL REGIMEN DE Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, San José, a las trece horas con siete minutos del día veintiuno de octubre del dos mil trece.

Visto el recurso de apelación interpuesto por **xxxxxx**, cédula N° xxxx, contra la resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 7531.-

Redacta el Juez ALFARO GONZALEZ; y,

RESULTANDO

I.- Este Tribunal conoce del presente asunto como un órgano de instancia administrativa, de conformidad con la ley número 8777 del 7 de octubre del dos mil nueve, y su reglamento Decreto número 35843-MTSS del día 28 de enero del 2010.

II.- Mediante resolución número 1927 acordada en sesión ordinaria 045-2013 de las nueve horas del día dieciocho de abril del dos mil trece, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, recomendó el otorgamiento de la jubilación por vejez bajo los términos de la Ley 7531, disponiendo un tiempo de servicio de 413 cuotas, desglosadas de la siguiente manera: 18 años, 02 meses y 15 días, al 31 de diciembre de 1996, que equiparo a 219 cuotas, y de 1997 al 15 de febrero del 2013, 194 cuotas, para un total de 413 cuotas, de las cuales 13 cuotas son bonificables; equivalente a un porcentaje de 2.250% y fijando una mensualidad jubilatoria de ₡1,158,256.05; incluida la postergación, todo con rige al cese de funciones.

III.- Por su parte la Dirección Nacional de Pensiones por resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, deniega el otorgamiento del beneficio jubilatorio con base en la ley 8536 del 11 de agosto del 2006, reformada por la ley 8784 de 11 de noviembre del 2009, que elimino el transitorio I de ley 8536 citada, tomando en consideración que el gestionante no cumple con los requisitos establecidos legalmente para otorgamiento del beneficio jubilatorio de acuerdo a lo establecido por la ley 2248, articulo 2 inc a, en virtud de que el gestionante no



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

cumple con el mínimo de 20 años laborados antes del 18 de mayo de 1993, fecha de última vigencia de esta ley. De la misma forma se deniega por la ley 7268, por no cumplir con el mínimo de 20 años al 13 de enero de 1997, fecha de última vigencia de esta ley. Asimismo se deniega por la ley 7531 del 10 de julio de 1995, en virtud de que el gestionante no cumple con el mínimo de 400 cuotas que exige el artículo 41 en su transitorio V. Contabiliza un total de 388 cuotas, desglosadas de la siguiente manera: 290 laboradas en el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 15 por bonificación de la ley 6997, y 98 laboradas en la American Business Academy (Considerando III).

III.-Que en el presente asunto se han observado las prescripciones legales y, se resuelve dentro del plazo de ley;

CONSIDERANDO

I.- La divergencia entre ambas instancias radica en el cómputo del tiempo de servicio. Dicha diferencia deviene por una parte porque el tiempo que contabiliza en educación la Dirección Nacional de Pensiones lo hace por cuotas y no por años de servicio, dejando de aplicar cociente 9 y 11 a la vigencia de las Leyes 2248 y 7268, totalizando la suma de fracciones de tiempo a cociente 12; y por otra parte porque el tiempo que acredita la gestionante como laborado en la Institución American Business Academy, no lo considera como laborado en educación. Véase que esta diferencia mencionada en el tiempo de servicio se mantiene a pesar de que la Dirección Nacional de Pensiones dispone un mayor número de cuotas por bonificaciones de la ley 6997.

II.- En cuanto al tiempo de servicio, estudiados los autos, se observa claramente que la diferencia entre ambas instancias se debe a que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional le acredita como laborado en educación el tiempo desempeñado por la gestionante en la American Business Academy, concretamente 10 años, 01 mes y 15 días, del año 1981 a 1989, (ver documentos de folios 12, 80 y 88) Dicho periodo lo totalizo a cociente nueve y además le reconoció bonificaciones del artículo 32 de la ley 2248. A diferencia de la Dirección Nacional de Pensiones que le computo el tiempo laborado en la American Business como empresa privada y lo totalizo a cociente doce.

A.- En cuanto al reconocimiento de tiempo laborado en la American Business.

Con respecto a las Instituciones Privadas de Educación Superior, este Tribunal ha establecido en reiteradas resoluciones que:

“ Que si bien es cierto los fines de las Universidades e Instituciones Universitarias del Sector Privado es la docencia, lo cierto es que según el artículo 1 de la ley 2248 en relación con el artículo 116 del Código de educación, estas Instituciones no se encuentran dentro de la membresía de pertenencia a la ley 2248. Incluso para mayor abundamiento es importante agregar que si el legislador hubiera pretendido incluir las Universidades Privadas dentro de la membresía del Magisterio Nacional, en las sucesivas reformas que realizo a la ley número 2248, las hubiera incluido,



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

concretamente en la ley 7268 del día 14 de noviembre de 1991, época en la cual ya funcionaban en el país varias Universidades Privadas, o bien integrarlas mediante la Ley 7531, la cual claramente omite mencionar las Universidades Privadas, incluso en el artículo 8 inciso a) se establece el ámbito de cobertura, a "*quienes ocupen en cargos docentes (...) y en las Universidades Estatales*".

De manera que es claro que el legislador en cuanto al sector universitario, incluyó únicamente a quienes ejerzan cargos en las Universidades Estatales. Obsérvese que la principal reforma en cuanto a las Universidades fue que la Ley 2248 se refería exclusivamente a la Universidad de Costa Rica, y es a partir de la Ley 7268 que se aclara extendiendo el ámbito de cobertura a todas las Universidades Estatales, excluyendo cualquier mención a las Universidades Privadas. De manera que, el régimen por el que el reclamante debe optar es el Régimen Universal de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo las cotizaciones aportadas por el trabajador para este Régimen no para el Magisterio Nacional.

Sobre el particular, el artículo **1** de la Ley **2248**, establecía:

"Estarán protegidos por la presente ley las personas que actualmente gozan de pensiones y jubilaciones, las comprendidas en el artículo 116 del Código de Educación, las que prestan servicio en el extranjero, en forma transitoria, en asuntos de interés para la educación nacional, y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece. Para los efectos de este artículo, debe entenderse que la Universidad de Costa Rica es una institución docente oficial."

Conforme a la referencia, es importante señalar que el artículo 116 del Código de Educación señala:

"...Serán computados además como servidos en la enseñanza, para los efectos de ascensos y de pensión:

Los años en que el maestro titulado ha servido como miembro propietario o suplente del Poder Legislativo.

Aquellos en que ha prestado servicios en el país en colegios o escuelas particulares reconocidas, de primario o de segunda enseñanza, o en cualquier destino relacionado con la educación pública, siempre que su desempeño lo obligue a estar al corriente de los progresos educativos, que haya contribuido a la difusión de la cultura nacional y que sus servicios hayan sido conceptuados como buenos, circunstancias todas que deben hacerse constar en el expediente respectivo..."

III.- Considera este Tribunal importante transcribir las intervenciones verbales de algunos de los Diputados durante el debate de la Ley 7268, discutida en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. En la sesión ordinaria número tres de las trece horas treinta minutos del 15 de mayo de 1991, se evidencia que si bien inicialmente en el proyecto de ley se pretendió la inclusión de las Universidades Privadas, lo cierto



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

es que la discusión del mismo llevo a la consideración del Legislador de no contemplarlas, así:

“DIPUTADO SOLEY SOLER:

(...) Creo que si estamos haciendo un esfuerzo por aliviar la carga del Estado en una serie de campos, y las Universidades Privadas son de reciente iniciación, con gran suceso, todos hemos visto el gran potencial económico que tienen los edificios, los centros deportivos, etc, que están utilizando, me parece que el régimen de pensiones debe ser un régimen especial para ellos, creado y financiado por ellos mismos (...) Me parece que los sistemas de las Universidades Privadas pueden establecer perfectamente sus regímenes especiales, financiadas por ellos mismos y no a cargo de todos los costarricenses vía el presupuesto nacional (...)

DIPUTADO SOTO ZÚÑIGA:

(...) En ese sentido voy apoyar la moción del Diputado Soley Soler, porque me permite señalar que si las personas de las Universidades Privadas quieren tener un régimen de pensiones, entonces que lo formen o se adscriban al que vamos abrir las posibilidades al aprobar este proyecto (...)

DIPUTADO FERNÁNDEZ VEGA:

(...) Deseo adherirme a lo que acaba de señalar el Diputado Soto Zúñiga. Hay una Institución que se llama Corporación Bursátil de Centroamérica que esta haciendo un estudio precisamente para establecer otros regímenes de pensiones a nivel casi privado, de tal manera que ahí calza perfectamente eso (...)

DIPUTADO VILLALOBOS VILLALOBOS:

(...) Me parece que todo lo privado debería estar excluido de este Régimen, excepto las instituciones semioficiales, en la cobertura que tienen como un aporte de ayuda que el Estado les da pagando un número de profesores y maestros, ellos entonces no pueden ser excluidos por que son empleados del Estado (...)

DIPUTADO LACLE CASTRO:

En el caso de la moción presentada por el Diputado Soley Soler y de la ampliación que sugieren los Diputados Villalobos Villalobos, Cordero Gamboa y Fernández Vega, me parece que es interesante la tesis que se ha planteado. Digo esto porque tienen alguna razón los señores Diputados que abogan por eliminar a los docentes de las Universidades Privadas de estos beneficios, en el tanto que su inclusión pueda significar una carga mayor para el Estado (...) **Voto número 1264-2012 de las trece horas cincuenta y seis minutos del día doce de noviembre del 2012.**

Bajo estas argumentaciones, se excluyó del tratamiento especial del Régimen del Magisterio Nacional a las Instituciones de Educación Superior Privadas, es así que en el particular caso



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

resulta imposible el contabilizar como educación el tiempo laborado por la recurrente en la American Business Academy, aunque haya cotizado dicho tiempo para el Régimen del Magisterio Nacional, pues la pertenencia no se otorga por la cotización, sino que viene impuesta por ley, siendo por ello, correcta la interpretación dada por la Dirección Nacional de Pensiones, el contabilizar dicho tiempo como empresa privada.

B.- En cuanto al tiempo laborado en Educación.

Ahora bien, de un estudio del tiempo de servicio realizado por ambas instancias, este Tribunal observa que el año 1981, se está computando completo en la American Business Academy, sin embargo, de acuerdo a la certificación expedida por la Unidad de Pensiones del Departamento de Registros Laborales del Ministerio de Educación Pública, la gestionante laboro 04 meses y 09 días, en el Liceo Joaquín Jiménez Nuñez, por lo este tiempo debe ser computado en educación.

C.- En cuanto a las bonificaciones de la ley 6997.

También considera este Tribunal que no se le debe computar bonificación de la ley 6997 en el año 1992, pues el Liceo Luis Dobles Segregada en ese tiempo ostentaba un puntaje de 0.07, puntaje que para este Tribunal no debe ser reconocido, pues ha establecido en varias resoluciones que si bien no se requiere los diez puntos para obtener el reconocimiento en el tiempo de servicio, este sí debe contar con un parámetro razonable de calificación, pues el reglamento para el pago de zonaje de los servidores del Ministerio de Educación Pública se calculara tomando en consideración, entre otros factores, la insalubridad, vías de comunicación, transporte, alimentación etc. De acuerdo a lo anterior y según certificación expedida por el Departamento de Registros Laborales del Ministerio de Educación Pública, solamente se le debe reconocer una bonificación de 07 meses, por los años 1990 y 1991, laborados en los Liceos de Coronado y Moravia, donde obtuvo un puntaje de 4.24 y 4.13 respectivamente.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente la apelante alcanza en educación un tiempo de servicio al 18 de mayo de 1993 de 04 años, 03 meses y 27 días, al 31 de diciembre de 1996 de 08 años y 01 mes y 09 días, y al 15 de febrero del 2013, 24 años y 02 meses, y 15 días.

D.- Con respecto al tiempo laborado en la Empresa Privada.

De acuerdo con las certificaciones visible a los folios 12, 13, 52 y 53, expedidas por la American Business Academy, se establece que la recurrente tiene acreditado tiempo de 1981 a 1989, el cual totalizado a cociente doce, y excluyendo los meses no cotizados de marzo y abril de 1981, enero y febrero de 1984, enero y febrero de 1986, enero y febrero de 1987 y enero y febrero de 1989, corresponde a 07 años, 09 meses, y 21 días.

Así las cosas, la gestionante acredita un tiempo total de 32 años y 15 días, que corresponden a 384 cuotas, sin embargo, en virtud de que la Dirección Nacional de Pensiones le reconoció 388 cuotas al 15 de febrero del 2013, en respeto del principio de no



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

reforma en perjuicio, se le mantiene, faltándole por consiguiente un total de 12 cuotas para adquirir el beneficio jubilatorio conforme a la ley 7531.

V.- De conformidad con lo expuesto, por mayoría, se declara sin lugar el recurso interpuesto y se confirma la resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, de la Dirección Nacional Pensiones.

POR TANTO

SE CONFIRMA la resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, de la Dirección Nacional Pensiones. Notifíquese. Se da por agotada la vía administrativa.

LUIS FERNANDO ALFARO GONZALEZ

CARLA NAVARRETE BRENES

HAZEL CÓRDOBA SOTO

VOTO SALVADO.

I.- El suscrito Juez disiente del voto de mayoría, pues considera que los motivos opuestos tanto por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional como por la Dirección Nacional de Pensiones, no son atendibles.

II.- De este modo, se tiene por acreditado que la apelante ha laborado para la American Business Academy por un espacio de 10 años, 01 mes y 15 días, desde el año 1981 hasta 1985, y es criterio por parte de este Juez que la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior del Sector Privado es la docencia, pues según el artículo 1 de la ley 2248 en relación con el artículo 116 del Código de Educación, normativa que facultaba para incluir en la membresía a este tipo de Universidades, y en este sentido el tiempo que los funcionarios demuestran con estas Instituciones podrá ser considerado como tiempo laborado en educación. Considera el suscrito que estas Instituciones al estar reconocidas por el Estado, expiden títulos que son válidos ante las instancias públicas y privadas, en virtud del reconocimiento estatal (el



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Consejo Superior de Universidades Privadas CONESUP), ese reconocimiento como tal, las incluye dentro de la membresía del Magisterio Nacional al amparo de la ley 2248.

Sobre el particular, el artículo **1** de la Ley **2248**, establecía:

"Estarán protegidos por la presente ley las personas que actualmente gozan de pensiones y jubilaciones, las comprendidas en el artículo 116 del Código de Educación, las que prestan servicio en el extranjero, en forma transitoria, en asuntos de interés para la educación nacional, y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece. Para los efectos de este artículo, debe entenderse que la Universidad de Costa Rica es una institución docente oficial."

Conforme a la referencia, es importante señalar que el artículo 116 del Código de Educación señala:

"...Serán computados además como servidos en la enseñanza, para los efectos de ascensos y de pensión:

Los años en que el maestro titulado ha servido como miembro propietario o suplente del Poder Legislativo.

Aquellos en que ha prestado servicios en el país en colegios o escuelas particulares reconocidas, de primaria o de segunda enseñanza, o en cualquier destino relacionado con la educación pública, siempre que su desempeño lo obligue a estar al corriente de los progresos educativos, que haya contribuido a la difusión de la cultura nacional y que sus servicios hayan sido conceptuados como buenos, circunstancias todas que deben hacerse constar en el expediente respectivo..."

La apelante según certificaciones de tiempo de servicio y las constancias donde se indica la cotización correspondiente, visibles a folios 43 al 49, ingresó a laborar para la Universidad Federada de Costa Rica en el año 1980, por lo que en criterio de este Juez es que se debe considerar como tiempo servido en educación nacional, por cuanto laboró para esta Universidad a la vigencia de la ley 2248.

Al respecto sobre este tema al Tribunal de Trabajo se pronunció en el mismo sentido, al establecer la obligación de computar como laborado al Magisterio Nacional, el tiempo servido en la **Universidad Autónoma de Centroamérica, la Escuela American Business Academy y la Corporación de Inversiones Tiatira SRL, vinculada con la FUNDACIÓN**



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

SAPIENTIA HISPANOAMERICANA, entidad conocida como Universidad Hispanoamericana.

1524, Sección Tercera, 8:40 horas del 14/11/2002

"Es menester aclarar que se incluye el tiempo laborado en la Universidad Autónoma de Centroamérica, pese a que la Dirección Nacional de Pensiones no lo hizo, pues está íntimamente relacionado con la actividad docente. Sobre este particular, el inciso c) del artículo 8 de la Ley 7531, refiriéndose al ámbito de cobertura de esa Ley establece que, por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente: Los funcionarios que ejerzan actividades docentes regulares y continuas. Como podemos apreciar la norma es muy clara y incluye expresamente en el ámbito de protección del régimen de pensiones del Magisterio Nacional a los funcionarios de universidades autónomas, de tal forma que la oposición de la Dirección Nacional de Pensiones carece de fundamento jurídico."

778, Sección Primera, 8:40 horas del 21/06/2002

"Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto; y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones es contrario a derecho. En efecto, ésta desconoció tiempo de servicios en la American Business Academy, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 2248, que establece: "Estarán protegidos por la presente ley...y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece..." (el destacado no es del original). En el caso de estudio, si bien la interesada no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, y las que la trabajadora tendrá a su cargo, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta en la resolución número 9187, del veintidós de noviembre de 2000. En cuanto a la Ley aplicable, como los servicios fueron en una entidad dedicada a la educación, de los cuales más de veinte fueron anteriores al 18 de mayo de 1993, es la Ley 2248 la que se debe aplicar al caso para la fijación del salario y el artículo 9 de la 7268 para determinar el aumento por postergación, tal y como lo hizo la Junta. El anterior razonamiento tiene



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

sustento en el artículo 29 del Convenio 102 de la O.I.T., relativo a la norma mínima de seguridad social y la llamada pertenencia al régimen."

1617 Bis, Sección Segunda, 8:00 horas del 16/06/2006

"II.- Examinados los documentos aportados por el interesado, se concluye que la CORPORACIÓN DE INVERSIONES TIATIRA SRL se encuentra vinculada a la FUNDACIÓN SAPIENTIA HISPANOAMERICANA, entidad conocida como Universidad Hispanoamericana autorizada por el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada CONESUP para realizar actividades propias de la educación superior particular, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Creación del señalado Consejo N°6693 del veintisiete de noviembre de 1981. Existen elementos idóneos demostrativos de la alegada vinculación de la Corporación de Inversiones Tiatira SRL con la educación superior privada, dado que según los documentos visibles a folios 220 a 222, los cuales han sido admitidos con el carácter de prueba para mejor resolver, dicha sociedad está dedicada a la contratación y pago de los profesionales que imparten la docencia, investigación social y acción social de las diversas actividades académicas en la Universidad Hispanoamericana. Habiéndose acreditado el aludido nexo entre la Universidad Hispanoamericana y la referida Corporación, resulta imperativo admitir la impugnación planteada por el Profesor (...). Sin perjuicio de las diferencias de cotización adeudadas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, detalladas a folio 169 del expediente administrativo, debe resolverse que al salario devengado en la Universidad Estatal a Distancia en el mes de febrero del 2003, ha de agregarse el salario escolar prorrateado así como el sueldo de doscientos mil colones devengado por el recurrente (...), en ese mismo mes y año en la empresa Corporación Inversiones Tiatira SRL(documentos de folios 144 y 172)."

114, Sección Segunda, 9:50 horas del 26/01/2007

"III.- No es acogible la proposición de la Dirección, por cuanto no es la naturaleza jurídica de una entidad educativa, la que define su pertenencia al sector docente, sino el tipo de servicios que presta, lógicamente bajo los presupuestos de ley para que funcione una persona jurídica como tal y para la realización material de la actividad docente. Al efecto, basta con que se cumplan los supuestos fácticos dispuestos por el artículo 1 de la ley 2248 de cinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que rezan:



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

"Artículo 1. Estarán protegidos por la presente ley las personas que actualmente gozan de pensiones y jubilaciones, las comprendidas en el artículo 116 del Código de Educación, las que presten servicios en el extranjero, en forma transitoria, en asuntos de interés para la educación nacional, y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación Pública y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en la particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece. Para los efectos de este artículo, debe entenderse que la Universidad de Costa Rica es una institución docente oficial."

Como bien se aprecia de la simple lectura de este ordinal, la ley bajo cuyo cobijo se declaró la pensión del petente, no excluía a los trabajadores del sector docente en el ámbito privado, de los beneficios de sus disposiciones. Sencillamente se exigía que las entidades involucradas en procesos y actividades de educación fueran reconocidas por el Estado. En el caso bajo estudio, de la constancia de folio 112 y documentos de folios 91 y 92, se desprende que el promovente laboró para la Fundación, en el curso de "Maestría en Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Nacional", en un contrato a plazo fijo, desde el ocho de septiembre al seis de diciembre del año dos mil tres. Luego, se cumple el presupuesto prescrito en la ley, de laborar en cargo docente o administrativo en una institución particular reconocida por el Estado".

575, Sección Segunda, 8:30 horas del 21/08/2009

"II.- Se conoce la disconformidad con lo dispuesto por la Dirección Nacional, que deniega la pretensión del recurrente, de la jubilación bajo el Régimen del Magisterio Nacional, argumentando que sólo ha laborado para entidades privadas de educación superior, que no están comprendidas dentro de los supuestos de la Ley 2248, de cinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y ocho. El reclamante solicitó durante la tramitación de este procedimiento, que su gestión fuera examinada, a fin de que se le otorgara una pensión por edad con el régimen normativo de dicha ley (ver folio 30).

III.- Estudiados los autos, se arriba al válido convencimiento que los reparos opuestos por la Dirección Nacional de Pensiones, no son atendibles. El apelante ha laborado para el Instituto Tecnológico de Administración de Negocios (ITAN) desde el mes de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, cuando menos hasta el mes de abril del dos mil siete, y para la Asociación Veritas para la Enseñanza Universitaria desde febrero del año mil novecientos noventa y seis, también, cuando menos, hasta abril del dos mil siete (ver documentos de folios 4, 5, 8, 12 a 16 y 25). Durante esos períodos, ha cotizado para el Régimen de Reparto del Magisterio Nacional, de enero de mil novecientos ochenta y siete a marzo de mil novecientos



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

noventa y tres, de mayo de mil novecientos noventa y tres a julio de mil novecientos noventa y cinco (ver folio 40), de agosto de mil novecientos noventa y siete a febrero del dos mil, de mayo del dos mil a agosto del dos mil uno, y de febrero de dos mil dos a abril del dos mil siete (ver folio 41). Con esos parámetros, se hacen los cálculos de rigor, y se consta que laboró once años y cuatro meses durante la vigencia de la Ley 2248, hasta el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, y a enero del dos mil siete, un total de veintidós años, cuatro meses, veintiocho días. Luego, los cálculos de tiempo de la Junta de Pensiones, de folios 42 a 44, son correctos. Durante esas relaciones laborales, también ha cotizado en algunos períodos para la Caja Costarricense de Seguro Social (ver folios 12 a 66). Ahora bien, sobre los reparos de la Dirección Nacional, deben tenerse presentes los supuestos fácticos dispuestos por el artículo 1 de la Ley 2248, que regía cuando inició la relación laboral del promoverte con el ITAN:

ARTICULO 1º.-Estarán protegidos por la presente ley las personas que actualmente gozan de pensiones y jubilaciones, las comprendidas en el artículo 116 del Código de Educación, las que prestan servicio en el extranjero, en forma transitoria, en asuntos de interés para la educación nacional, y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece. Para los efectos de este artículo, debe entenderse que la Universidad de Costa Rica es una institución docente oficial.” (fin de la transcripción. Lo destacado no es del original). Como bien se aprecia de la simple lectura de este ordinal, la Ley 2248, no excluía a los trabajadores de instituciones privadas de la educación superior, de los beneficios de sus disposiciones.”

III.- Ahora bien, tampoco comparte este Juez el criterio del no reconocimiento de ese tiempo por cuanto según a folio 59 del expediente la recurrente cotizo para el régimen de reparto del año 1981 al año 1989, razón por la cual se considera que no lleva razón la Dirección Nacional de Pensiones, en no considerarlo como tiempo en educación. Bajo esa línea de pensamiento, en el caso que nos ocupa deberá efectivamente computarse un tiempo de disponiendo un tiempo de servicio de 34 años, 01 meses, lo cual equivale a 413 cuotas, de las cuales 13 cuotas son bonificables; equivalente a un porcentaje de 2.250% y fijando una mensualidad jubilatoria de ₡1,158,256.05; incluida la postergación, todo con rige al cese de funciones.

IV.- Razón por la cual me aparto del criterio determinado por las instancias precedentes y se revoca la resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, y en su lugar se confirma la resolución número 1927 acordada en sesión ordinaria 045-2013 de las nueve horas del día dieciocho de abril del dos mil trece. Se aclara que los actos de ejecución de esta resolución no requieren aprobación de la Dirección Nacional de Pensiones.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

POR TANTO

Se revoca la resolución número DNP-ODM-01926-2013, de las once horas con treinta y un minutos del día veinticuatro de mayo del dos mil trece, y en su lugar se confirma la resolución número 1927 acordada en sesión ordinaria 045-2013 de las nueve horas del día dieciocho de abril del dos mil trece. Notifíquese. Se da por agotada la vía administrativa.

LUIS FERNANDO ALFARO GONZALEZ
VOTO SALVADO